

Comunidad nativa exige U\$500 mil para liberarla

Un policía resultó muerto en fallido intento de rescate de una barcaza petrolera secuestrada en la Amazonía

Más de 20 personas a bordo de botes interceptaron violentamente un convoy fluvial de la empresa que transportaba 10.500 barriles de crudo.

JOAQUÍN RIVEROS

El suboficial de la Policía Nacional de Perú (PNP) Carlos Alfredo Neyra Abanto, de 30 años, murió este lunes 27 de abril mientras era trasladado en helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú al Hospital Regional de Loreto. Según informó Infobae, el general Fernando Enrique Mego Avellaneda, jefe de la Región Policial de Loreto, confirmó el deceso en declaraciones a TV Perú. El médico que acompañaba el traslado señaló que el agente murió durante el vuelo.

El director del hospital donde fue recibido, Jehoshua López, contó a RPP que el paciente "llegó sin signos vitales". Un segundo oficial de la policía, Abraham Saldaña Sánchez, recibió perdigones en el hombro, aunque su estado es estable, según consignó Infobae.

El hecho ocurrió en la región de Loreto, cubierta casi en su totalidad por la selva amazónica. El río Corrientes, donde se dieron los hechos, atraviesa el distrito de Trompeteros, una zona de difícil acceso en que no existen carreteras y el único modo de transporte es el fluvial. Fue en ese lugar, específicamente en la comunidad nativa de Providencia, donde hace dos semanas se originaron los hechos que terminaron con la muerte del oficial Neyra Abanto.

Entonces, pobladores de la comunidad retuvieron una barcaza que cargaba 10.500 barriles de petróleo, y exigieron una millonaria suma de dinero para dejarla pasar.

Según consignaron Infobae Perú y "La República", el incidente se inició el pasado 12 de abril, a las 5:20 de la madrugada, cuando aproximadamente 25 personas a bordo de botes interceptaron violentamente un convoy fluvial de la empresa Ricsa, especializada en



En la foto, el policía fallecido, Carlos Alfredo Neyra Abanto, de 30 años.

yanchi. Según reportó "La República", Ricsa presentó audios ante el Ministerio Público que vincularían a estos dirigentes con las exigencias económicas.

Rescate fallido

El lunes en la madrugada, un contingente de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP junto a efectivos de la Marina de Guerra, se dirigió a Providencia para liberar a los retenidos y recuperar la embarcación. El operativo fue supervisado por personal de la Fiscalía de Nauta. Sin embargo, al intentar poner en marcha la nave, se desató un ataque desde la espesura de la selva. "Hubo disparos por parte de los pobladores", confirmó el general Mego Avellaneda, según reportó "La República".

Las cosas se complicaron aún más cuando se constató que alguien había retirado piezas de los motores para impedir la puesta en marcha de la barcaza. "Pareciera que hay dolo en esta situación, porque el motorista no se ha encontrado, y hemos tenido que llevar un motorista para intentar rescatar la nave", dijo el jefe policial, según Infobae. El operativo solo logró liberar a tres de los cinco tripulantes retenidos. Entre los que continúan desaparecidos está Francisco Guerra Cartagena, patrón de una de las embarcaciones, cuya hija pidió públicamente apoyo para su liberación, según informó "La República".

A Según contó RPP el gerente de Ricsa, la extorsión a embarcaciones en el río Corrientes no es nueva. "Es algo que ya viene ocurriendo año tras año. Siempre todas las barcasas que pasan por el río exigen un peaje para poder pasar". Normalmente, según explicó, la exigencia rondaba entre los 10 mil soles, pero esta vez la cifra escaló hasta los dos millones de soles, equivalentes a US\$ 500 mil".

el transporte de petróleo, en el río Corrientes. Los tripulantes, siete en total, fueron amenazados y obligados a desviar su ruta hacia el puerto de la comunidad de Providencia. La barcaza retenida, la Pacífico XIX, y el remolcador Coseda I transportaban los barriles con destino a la Refinería de Iquitos. Según declaró a RPP el gerente de operaciones de Ricsa, Paúl Vígo, los trabajadores fueron forzados a

ceder el control de la maquinaria mediante el uso de la fuerza física y verbal.

La empresa formalizó denuncias por secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos ante la Fiscalía Provincial, e identificó como principal responsable al jefe la comunidad, Manuel Peraza Sandi, junto al teniente gobernador Gary Peraza Valera y al dirigente Isaías Saboya Ma-